Gasto público y cambio social: una crítica metodológica

DAVID BARKIN

Durante los tres años transcurridos desde su publicación, *The Mexican Revolution: Federal Expenditures and Social Change Since 1910*[1] ha gozado de la estimación no sólo de los estudiosos interesados en México sino, más ampliamente, de la de los interesados en los fenómenos del cambio social. Con la aparición de una edición revisada, a la rústica, en la que orgullosamente se anuncia que el libro obtuvo el Premio Bolton para el mejor estudio histórico sobre América Latina en 1967, se encuentra un nuevo testimonio de la estimación que los colegas de Wilkie tienen por su obra. Parece entonces apropiado reexaminar el libro y tratar de determinar si éste ha resistido la prueba del tiempo y si se confirman los elogios dispensados hace unos años.

Para los economistas que lo manejan, este libro resulta un trabajo ejemplar de investigación histórica, que intenta integrar la información y las técnicas analíticas de varias disciplinas a fin de llegar a algunas conclusiones acerca del efecto global de la Revolución mexicana durante sus primeros cincuenta años. La combinación del análisis histórico con la investigación documental incansable, ha permitido a Wilkie reunir lo que quizá sea el conjunto de estadísticas más completo de que se dispone acerca de la forma en que el Gobierno federal ha distribuido sus recursos en México. Además, al comparar los datos de gasto real con los del presupuesto de egresos y con los planes anunciados por las diferentes administraciones, Wilkie presenta numerosas inferencias acerca de los estilos político, económico, social y

NOTA: El autor es investigador auxiliar en El Colegio de México y durante la preparación de este trabajo gozó de una beca del Joint Committee of Latin American Studies del Social Science Research Council, y del American Council of Learned Societies.

1 James Wilkie, *The Mexican Revolution: Federal Expenditures and Social Change Since 1910*, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1970, segunda edición, revisada.

"equilibrado" como Wilkie los llama, de los distintos presidentes de México después de 1910. Otra virtud del trabajo estriba en que "se presentan estadísticas detalladas, de suerte que puedan ser reordenadas si el lector no está de acuerdo con la forma en que aquí se presentan" (p. 21). En realidad, muchos estudiosos han aprovechado esta facilidad.

No es el propósito de este texto resumir el análisis de Wilkie o comentar el enfoque que utiliza, dado que esto ha sido hecho en varias otras reseñas.[2] Tampoco parece necesario mencionar con gran detalle algunas de las instancias de análisis histórico que amplían la profundidad del análisis, como la inclusión de partes de las entrevistas que Wilkie hizo durante su estancia en México. La larga cita de las ideas de Ramón Beteta acerca de la corrupción administrativa en México (pp. 8-9) bien puede convertirse en un texto clásico; también es de gran interés la declaración de Lázaro Cárdenas (pp. 72-73) que recoge su opinión sobre la política. En cambio, en este texto, hemos preferido presentar comentarios sobre algunos de los enfoques metodológicos que Wilkie utiliza para el estudio del gasto federal y el cambio social. Esto no significa desdeñar su contribución al análisis de la relación entre ideología y políticas presupuestarias, al que se hará breve referencia y que es, sin duda, de importancia para los estudiosos, sino más bien cuestionar los procedimientos que el autor utilizó para comparar esta parte de su trabajo con el fenómeno del cambio social.

Se advierten varias debilidades serias cuando el autor intenta relacionar el proceso de gasto público con los cambios sociales ocurridos durante el período que estudia. Para poder hacer esta comparación, Wilkie construyó un "índice de pobreza" basándose en la información censal disponible sobre las características sociales y culturales de la población. Wilkie se cuida de no caer en una trampa etnocéntrica al diseñar este índice y nos asegura (p. 206) que lo evitó, pero, como veremos, ello no le impide incurrir en algunos problemas metodológicos serios en esta parte del análisis.

Sin embargo, antes de hacer referencia a estos problemas examinaremos algunas de las cuestiones contenidas en su análisis de los procesos de formulación presupuestal y de gasto federal. Quizá la deficiencia más seria de esta parte del análisis se deriva de un enfoque inadecuado del proceso de formulación presupuestal en México y de los efectos de este proceso de formulación sobre los tipos de gasto que "inesperadamente" se incrementan durante el curso del año fiscal. En realidad, este "acelerado crecimiento de los fondos disponibles para gasto después de que el presupuesto inicial ha sido elaborado" (p. 91) no resulta sorprendente para la mayoría de los estudiosos de las finanzas públicas mexicanas. Incluso en la Cámara de Diputados, que aprueba *ex post facto* los aumentos de gasto en que incurre el Poder Ejecutivo, se reconoce que "el presupuesto es el programa mínimo del gobierno que se propone ante la imposibilidad de prever el comportamiento del mercado interno y externo de capitales".[3] Rafael Rodríguez Barrera, un diputado del partido mayoritario, el Revolucionario Institucional, explicó que "es más prudente reducirse a contar con los ingresos propios, seguros, para no caer en el peligro y el riesgo de que por falta de financiamientos pudiera frenarse el proceso nacional".[4]

Son pues bastante explícitas las declaraciones oficiales acerca de la política de formulación presupuestal en México. El presupuesto que cada año se presenta a la Cámara de Diputados (al que Wilkie alude como "presupuesto proyectado") no es nunca concebido como el programa total de gasto del Gobierno federal, sino más bien como la parte del presupuesto de egresos que será cubierta con los ingresos ordinarios del Gobierno federal, estimados de manera sumamente conservadora; en consecuencia, es siempre un presupuesto equilibrado.[5] Aún más, el equilibrio presupuestal es un requisito legislativo existente. Todo esto es relevante porque conduce a comprender dos características importantes y sistemáticas del análisis del gasto público que Wilkie presenta: el hecho de que el gasto efectivo de beneficio social sistemáticamente queda por debajo del nivel presupuestado, y el también sistemático incremento de la participación relativa del gasto efectivo de fomento económico en el total, frente a la prevista en el documento enviado a la Cámara de Diputados.

También ayuda a comprender la forma en que el Gobierno está en posibilidad de presupuestar sistemáticamente gastos relativamente importantes para servicios sociales esenciales, como la educación, y por qué es constantemente criticado debido a que "el régimen no había cumplido el compromiso adquirido en el presupuesto inicial de invertir el 25% del total del gasto público en educación".[6] Wilkie hace notar que, en sus informes, el Gobierno por lo general menciona únicamente las cifras "proyectadas" y también hace notar que las cifras reales son mucho más difíciles de obtener.

Esta diferenciación consciente, que equivale al diseño de dos presupuestos, presenta otro problema en relación al significado de *la* ideología del Presidente de que se trate, que es un elemento importante en el análisis de Wilkie. El "presupuesto proyectado", que es el que se difunde y da a conocer ampliamente, parece recoger los lineamientos que el Gobierno piensa son más congruentes con la ideología política (de ahí la elevada proporción asignada, por ejemplo, al gasto en educación), mientras que el programa de gasto real representa el resultado del proceso de negociación con los distintos sectores de la economía así como la disponibilidad y las necesidades de financiamiento externo. Es difícil afirmar, en realidad, si uno de los dos, presupuesto o gasto real, representa *per se* la ideología de la administración.[7]

2 Véanse, por ejemplo, Robert Potash, *American Historical Review*, LXXIII, 5 (junio de 1968), p. 1689; Peter Calvert, *International Affairs*, 44, 3 (julio de 1968), p. 623; Michael Meyer, *Hispanic American Historical Review*, XLVIII, 3 (agosto de 1968), p. 509; Rodolfo Becerril, *Comercio Exterior*, XVII, 12 (diciembre de 1967) p. 1032; Thomas Skidmore and Peter Smith, *Latin American Research Review*, V, 1 (primavera de 1970), con una réplica de Wilkie en el mismo número, pp. 71-91. En las siguientes páginas se harán frecuentes referencias a esta última reseña.

3 *El Día*, México, 4 de noviembre de 1970.

4 *Ibidem*. Las mismas observaciones fueron presentadas con mucho más fuerza en 1968 por la Comisión de Presupuestos y Cuenta en su "Dictamen Relativo a las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal por el Ejercicio Fiscal de 1967", octubre de 1968, especialmente pp. 7, 14, 15, 16 y 18-23.

5 En su reseña, Skidmore y Smith nos recuerdan que todas las cifras presupuestales se refieren al gasto directo del Gobierno federal y, en consecuencia, excluyen el gasto de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal así como el de otros niveles de gobierno. Estas entidades gastan un monto equivalente al de los gastos analizados por Wilkie, de acuerdo con los datos disponibles a partir de 1965 (Wilkie, pp. 5-6). Wilkie responde a esta objeción señalando que estos gastos no están sujetos al control del Gobierno federal y, en consecuencia, no son de interés para su análisis. El autor de esta reseña considera que, aunque no es fácil conocer las cifras presupuestales del sector paraestatal, los lineamientos básicos de formulación de política y ejecución de proyectos están sujetos a cierto control y, lo que es quizá más importante, deben ser tomados en consideración por el Presidente en el diseño de su propio presupuesto y programa de inversiones.

6 Declaración del señor Jorge Garavito, diputado del Partido Acción Nacional, el 3 de noviembre de 1970, *El Día*, México, 4 de noviembre de 1970.

7 Esta definición se complica aún más por la dificultad para diferenciar claramente los tipos de las categorías de gasto como Wilkie los presenta. Véase la reseña de Skidmore y Smith, pp. 76-77.

En realidad, parece bastante clara la razón que explica las distintas tasas de crecimiento de los diversos renglones de gasto entre los presupuestos proyectado y efectivo. Muchos gastos de beneficio social son financiados con base en la recaudación del Gobierno federal debido a que no se consideran como gastos de inversión (o debido a que no son elegibles para ser financiados mediante créditos de las agencias financieras internacionales), mientras que muchos proyectos "económicos" son financiados con los fondos derivados de la colocación de deuda, interna y externa. El recurso al financiamiento deficitario de la inversión pública ha estado creciendo en los últimos años y la participación del endeudamiento externo en el total se ha incrementado tan rápidamente que se ha convertido en un asunto frecuentemente discutido en la prensa.

Aquí se encuentra otra deficiencia del análisis de Wilkie que merece ser destacada. El tratamiento de la deuda pública es deficiente en varios aspectos. No es particularmente acertado incluir los pagos por intereses y amortizaciones dentro de los gastos "administrativos" debido a que: *a)* ejercen efectos económicos distintos de los otros gastos incluidos en esa categoría, los que por lo general dan lugar a un incremento directo en el empleo gubernamental[8] y *b)* no hay forma de comparar esos gastos con el incremento en las obligaciones de deuda asumidas durante el período. Esta última cuestión se torna particularmente importante durante los últimos gobiernos, cuando porciones importantes de las nuevas contrataciones de deuda se utilizaron para refinanciar la deuda existente y para alterar la estructura de sus plazos (es decir, las obligaciones de rembolso) de acuerdo con la capacidad del Gobierno para atender tales desembolsos; parte de estas transacciones quedaron incluidas como gastos mientras que los correspondientes ingresos quedaron inexplicablemente omitidos de las cifras. Esto también provoca algunos problemas en la determinación de las fuentes de ingresos gubernamentales mencionadas en diversos momentos en el texto y presentadas en un cuadro estadístico del apéndice.[9] De este modo, a través de lo señalado en el texto (pp. 112-114) parecería que Wilkie tiene conciencia de este problema, pero que al abordarlo en otras secciones del texto no toma en cuenta los cambios a los que daría lugar.

Aunque estos problemas no suponen ninguna dificultad para el uso de las estadísticas que el autor presenta en la primera parte del libro, la segunda parte, dedicada al estudio del cambio social, presenta grandes obstáculos analíticos para el lector. Esto es fácilmente comprensible dado que la elaboración de un "índice de pobreza" es particularmente difícil. Wilkie seleccionó siete indicadores que "representan grados relativos de niveles de vida no modernos". "Estos indicadores se refieren a las personas que, en los censos, declararon que: *a)* son analfabetas; *b)* hablan sólo un dialecto indígena; *c)* viven en una comunidad de menos de 2 500 habitantes; *d)* andan descalzos; *e)* usan huaraches; *f)* regularmente comen tortillas en lugar de pan de trigo, y *g)* sus viviendas carecen de drenaje" (p. 205).[10] El índice es un promedio no ponderado de estos indicadores, dado que, como el autor señala, "nadie puede decir que el analfabetismo sea un problema más grave que el hablar únicamente un dialecto indígena" (p. 205).[11]

Al discutir las bondades de su enfoque, que el autor considera "una nueva visión de la pobreza en México durante el siglo XX" (p. 245), en comparación con otros, señala que P. L. Yates, uno de los primeros que intentó construir un índice del nivel general de bienestar en las diversas entidades federativas de México, se equivocó por ser un economista: "está bien que Yates, que es un economista, nos diga que en 1958 había 20.2 vehículos de motor por cada mil mexicanos, pero esto no nos indica qué tan bien ha vivido cada mexicano, comparativamente, durante 50 años de Revolución" (p. 245). Este ataque particular es injusto y malicioso; el índice de Yates abarca 10 indicadores, entre ellos la tasa de mortalidad, analfabetismo, relación maestros-alumnos, viviendas con agua corriente, salarios mínimos, alcance de la seguridad social, consumo de azúcar, electricidad y gasolina y, finalmente, número de camiones y automóviles en relación a la población.[12] Aunque Yates no intenta calcular las tasas de cambio de su índice ni presenta datos para todas las entidades de la nación, su método de análisis recuerda en gran medida al de Wilkie, por lo que la evaluación que éste hace de un trabajo pionero en su campo parece muy injustificada.

Pero un análisis más directo del índice de pobreza de Wilkie revela algunas debilidades derivadas de su propio concepto de pobreza. Al discutir este concepto, Wilkie tiene cuidado en diferenciar entre el mejoramiento de la situación material y la pobreza espiritual que puede ser resultado de los mejoramientos de las condiciones económicas (p. 205). Pero, al limitarse al uso de los indicadores censales, Wilkie en realidad se aproxima a una diferenciación de la población sobre la base de las características culturales de segmentos aislados de la población y de algunas de las manifestaciones sociales de la pobreza, pero no consigue, como explícitamente señala, medir directamente la pobreza.[13] Empero, critica a otros autores por elegir enfoques del cambio social que "suponen cambios para las masas pero no intentan medirlos directamente" (p. 203).

Lo anterior se torna evidente cuando se comparan los resultados de Wilkie con una jerarquización de las entidades federativas de México sobre la base de sus niveles de desarrollo relati-

8 Skidmore y Smith señalan que esta falla caracteriza a todo el análisis económico de Wilkie. De este modo, en ninguna de las categorías se diferencia el gasto corriente del gasto de capital, siendo difícil determinar el efecto real del gasto gubernamental sobre la sociedad sin tal división. Aunque tales datos son por lo general inobtenibles en casi todos los países de América Latina, como Wilkie señala en su réplica, sí existen en México, en un libro que Wilkie utilizó ampliamente en su investigación *(México: Inversión Pública Federal —1925-1963).* Las objeciones de Skidmore y de Smith al tratamiento de Wilkie sobre gasto corriente y gasto de inversión comprenden un análisis de los problemas de medir su efecto, a fin de discutir la relación entre gasto público y cambio social.

9 Debe mencionarse, sin embargo, que los datos sobre la deuda federal de México son particularmente difíciles de interpretar con claridad. Wilkie analiza algunos de los problemas para el manejo de estos datos (pp. 106-115) y proporciona información adicional en el apéndice M. Empero, en el apéndice F, las fuentes de ingreso federal están incompletas dado que no incluyen ningún ingreso por "préstamos y financiamientos" en los años anteriores a 1958, aunque, de acuerdo con el apéndice M, hubo importantes aumentos en la deuda pública antes de esa fecha.

10 En su inimitable prosa, Octavio Paz ha objetado la validez de algunos de estos indicadores para el propósito que Wilkie les asigna. Véase *Posdata*, Siglo XXI Editores, México, 1970, pp. 99-103. Skidmore y Smith presentan sus propias dudas acerca de la validez de los componentes y del significado de la "pobreza básica" de las masas.

11 Debido a las limitaciones de los datos censales, Wilkie sólo pudo usar tres indicadores para los años 1910 a 1930 (los incluidos en los incisos *d), e)* y *f).* Señala, sin embargo, que "los tres indicadores de 1910 a 1930 son representativos de los siete, si éstos hubieran sido registrados antes de 1940" (p. 232). No parece advertir que el uso de cifras absolutas está directamente relacionado con el número de indicadores incluidos. Si Wilkie tuviera razón, los tres indicadores serían suficientes para todo el período, pero dado que él claramente admite la existencia de diferencias, la sobrenumeración de ciertos grupos (indígenas, campesinos pobres, etc.) conduce a dudar de si él está consciente del sistema de ponderación implícito, que da más influencia a estos grupos subprivilegiados.

12 Paul Lamartine Yates, *El desarrollo regional de México,* Banco de México, México, 1961, p. 125.

13 Tampoco consigue, como pretende, "superar los problemas del análisis *per capita*" (p. 245), dado que todos sus datos están basados en cifras *per capita* promedio extraídas de los censos.

vo.[14] Con este enfoque se intenta también medir las diferencias en los niveles regionales de desarrollo entre 1900 y 1960 y, aunque el trabajo se encuentra aún en sus etapas preliminares, parece indicar que existen diferencias sustanciales en la posición que asumen los estados en cada uno de estos estudios. El segundo enfoque se basa en un índice de desarrollo que abarca veinte indicadores distintos, entre ellos: población urbana, índices de participación en la fuerza de trabajo de toda la población y de las mujeres, tasas relativas de participación en la fuerza de trabajo y de ingreso de cada uno de los tres sectores de la economía, ingreso *per capita*, productividad industrial, fuerza de trabajo no manual, migración interna, mortalidad juvenil, servicios médicos, analfabetismo, escolaridad, número de alumnos por maestro, niveles dietéticos y disponibilidad de agua potable. Los dos últimos indicadores sólo están disponibles para el análisis de la situación en 1960.

Cuando se comparan los dos índices desde principios de siglo (aunque la base es algo débil debido a que los estudios son desde 1900 y 1910) se encuentran 16 entidades diferentes (de las 30 entonces en existencia para las que pueden usarse los datos) en las que los rangos ocupados en las dos escalas muestran una diferencia mayor de 5, bien sea en dirección positiva o negativa; ambas jerarquizaciones muestran acuerdo sólo en un caso: el Distrito Federal es la más próspera de las entidades. En 1960 hubo 11 entidades (de 32) en las que se advierten diferencias de rango mayores de 5 y sólo 2 en las que ambas jerarquizaciones concuerdan: Distrito Federal y Chihuahua.

Al mencionar estas comparaciones no damos por supuesto que los investigadores de El Colegio de México hayan llegado a un método perfecto para determinar los niveles regionales de desarrollo relativo. Más bien queremos indicar que el desacuerdo de muchos estudiosos con el índice de pobreza de Wilkie parece tener buenos fundamentos. El índice de Wilkie no resulta tan válido como el autor lo considera y las pruebas de consistencia interna que él usa no establecen la validez de su índice, dado que no son independientes de la forma en que el índice se elaboró. Posteriormente, Wilkie compara la regionalización que él utiliza con una evidentemente inadecuada regionalización utilizada en el censo. Aunque menciona otras regionalizaciones que no pueden usarse debido a que no se basan en las divisiones estatales, no menciona la división regional por estados utilizada durante muchos años por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con propósitos de análisis económico. Puede ser interesante comparar esta división con algunas de las conclusiones sobre niveles de bienestar regional presentadas sobre la base de las divisiones de Wilkie.

Wilkie presenta una sección muy interesante en la que compara la distribución regional de la inversión pública con la población (pp. 246-257). Estos datos no incurren en las deficiencias del índice de pobreza y parecen indicar que, a pesar de los esfuerzos recientes, para corregir algunos de los desequilibrios sociales del gasto federal, a partir de la administración de López Mateos, la distribución regional del gasto ha contribuido a agudizar las desigualdades existentes". Wilkie ve con justificado escepticismo las políticas para alentar "la actividad privada... que, en algún grado, refuerzan los desequilibrios regionales económicos y sociales" (p. 255)[15] pero agrega que "no existen soluciones fáciles para conseguir ni el desarrollo social ni el económico" (p. 261). Esto forma parte de su perspectiva general que queda bien resumida en su declaración de que "quienes señalan que México necesita otra revolución violenta para mejorar el bajo nivel de vida de las mayorías no deben olvidar que la guerra civil dañó gravemente a la economía mexicana de 1910 a 1921 y que ha sido el desarrollo de la economía mexicana desde 1940 el que ha empezado, finalmente, a hacer descender los niveles de pobreza" (p. 261).

Cualquiera que sea la conclusión sobre la forma de medir los niveles de vida relativos en las distintas partes del país, es claro, como Wilkie muestra, que ha habido un sustancial mejoramiento de las condiciones de vida desde la Revolución mexicana.[16] Los niveles absolutos de consumo han aumentado y también ha crecido la esperanza de vida; los servicios médicos y educativos se han ampliado y México ha venido creciendo a una tasa real de más de 6% anual por casi 35 años. Sin embargo, también es muy claro que persisten serios problemas en la distribución del ingreso[17] y que ha habido muy pocos o ningunos progresos en la superación de las importantes disparidades regionales que continúan caracterizando a México.[18] Wilkie señala, al revisar la efectividad de las políticas aplicadas, que "la revolución política destruyó el viejo orden institucional, pero no creó un Estado democrático. La revolución social atacó la vieja estructura de la sociedad, pero no creó una nueva, ni económica ni socialmente. La revolución económica fomentó la industrialización en gran medida, pero no creó un crecimiento económico equilibrado ni un amplio mercado interno. En el momento en que un enfoque revolucionario más equilibrado pretende remediar las deficiencias de fases anteriores de la Revolución, la cuestión estriba en si México tiene los recursos para permitir el crecimiento adecuado y simultáneo de todos lo sectores de la sociedad y de la economía" (p. 281).[19] Pero a pesar de este análisis y del gran número de datos que permiten al lector observar la persistencia de esas desigualdades y, por tanto, la canalización de los beneficios del crecimiento económico a las regiones más prósperas de la nación, Wilkie se atreve a concluir que "México no necesita y no debe sacrificar el desarrollo económico en aras del gasto social" (p. 272).[20]

14 K. Albrechtsen, R. Domínguez y D. Murayama, "Desarrollo desigual en México: 1900-1960", Centro de Estudios Económicos y Demográficos, El Colegio de México, 1970 (mimeo).

15 Un examen más completo de las políticas mexicanas de desarrollo regional y un análisis de la función del sector privado en estos programas se encuentra en D. Barkin y T. King, *Regional Economic Development: The River Bassin Aproach in Mexico,* Cambridge University Press, Cambridge, 1970.

16 Quizá una de las contribuciones más importantes del debate entre Skidmore y Smith, y Wilkie es la de arrojar luz sobre la forma en que se usan los datos para inferencias causales sobre los efectos del gasto gubernamental en el cambio social. Wilkie señala que la "revolución social" de Cárdenas facilitó el crecimiento económico y que la "revolución económica" de Alemán no frenó el progreso social. Los críticos indican, con razón, las dificultades de este tipo de análisis y concluyen que "desorienta al lector". En esta parte del libro, como en muchas otras, las conclusiones que se presentan sobre diversos temas a menudo rebasan el campo del análisis, lo que conduce a generalizaciones excesivas de dudoso valor intelectual.

17 Ifigenia M. de Navarrete, "La distribución del ingreso en México", *El perfil de México en 1980* (vol. 1), Siglo XXI Editores, México, 1970.

18 Albrechtsen, *et. al, op. cit.*

19 Desafortunadamente, la identificación de distintos regímenes presidenciales con diferentes tipos de "revolución" no considera el tiempo necesario para la maduración de los distintos tipos de "revolución". Los diferentes períodos de gestación de las inversiones de beneficio social y de las directamente productivas, por ejemplo, probablemente obliguen a que la identificación del efecto de los programas presidenciales de gasto tenga que hacerse necesariamente sobre la base del examen de proyecto por proyecto.

20 Es un tanto desalentador advertir que, a pesar del hecho de que Wilkie está claramente consciente de que la pobreza relativa de las regiones no se ha modificado y de que acepta el análisis estadístico de Skidmore y Smith en el que se muestra que "han sido los estados ricos y no los pobres los que han venido eliminando la pobreza a ritmos relativamente más rápidos" (*op. cit.*, p. 82), Wilkie pueda sostener, sin mayor calificación, que "un período de revolución económica entre 1950 y 1960 no causó, como se ha pensado, estancamiento en el decrecimiento de las características de pobreza compartidas por un gran sector de la población, que hasta ahora [*sic*] ha sido estudiado inadecuadamente" (*op. cit.* p. 89).